

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



JUZGADO ONCE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.
Bogotá D.C., ocho (08) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso:	Acción de Tutela
Número:	110014003011-2024-00238-00
Accionante:	MARÍA LIZBETH CÓRDOBA ABADÍA
Accionado:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ, D.C.

Se procede a desatar la solicitud de amparo constitucional deprecado por la señora **MARÍA LIZBETH CÓRDOBA ABADÍA** contra **SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ, D.C.**

ANTECEDENTES

Atendiendo la facultad otorgada por el artículo 86 de la Constitución Política, la señora **MARÍA LIZBETH CÓRDOBA ABADÍA**, presentó acción de tutela pretendiendo le sea protegido su derecho fundamental de petición que considera fue vulnerado por la **SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ, D.C.**

Pretendiendo que en garantía de los derechos fundamentales de petición y del debido proceso, se ordenen a la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C., en el término de 48 horas, resuelva los derechos de petición instaurados, el 10 de noviembre de 2023 radicado con el No. 2023ER42579501, y el presentado el 19 de diciembre de 2023, al que le correspondió el radicado No. 2023ER46141401, que piden se dé por terminado el Proceso de Cobro Coactivo No. 202206094300103063, en donde se libró mandamiento de pago mediante la Resolución No. DCO-034031 del 13 de junio de 2022 por el impuesto de vehículos de los años 2017, 2018 y 2019 del campero con placas IEM 689, por pago total de la obligación cobrada, pago realizado el 9 de noviembre de 2023 en el BANCO AV VILLAS, conforme a los recibos oficiales de pago de impuesto de vehículos que fueron impresos y entregados en el Súper CADE del CAD, y en consecuencia se ordene el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y la devolución de los dineros embargados, que se encuentran en títulos de depósito judicial.

Lo anterior con fundamento en que, por acción de tutela con radicado No. 11001408803820230029400 que cursó ante el Juzgado 38 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, D.C., y en segunda instancia en el Juzgado 10 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, D.C., se enteró con respuesta del 2 de noviembre de 2023, que en su contra existía el proceso de cobro coactivo No. 202206094300103063, en donde se había librado mandamiento de pago mediante la Resolución No. DCO-034031 del 13 de junio de 2022 por el impuesto de vehículos de los años 2017, 2018 y 2019 del campero con placas IEM 689. Que, una vez se entera del mandamiento ejecutivo, el día 9 de noviembre de 2023, cancela la totalidad de las obligaciones cobradas en el proceso de cobro coactivo, en el BANCO AV VILLAS, conforme a los recibos oficiales de pago de impuesto de vehículos

que fueron impresos y entregados en el Súper CADE del CAD el mismo 9 de noviembre de 2023.

Continúa diciendo que, hechos estos pagos, el 10 de noviembre de 2023 solicitó a la Oficina de Cobro Especializado de la Subdirección de Cobro Tributario de la Dirección Distrital de Cobro de la Secretaría Distrital de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá, D.C., la terminación del proceso, el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y la devolución de los dineros embargados, a la que se le dio el radicado 2023ER425795O1. Que, sin que se diera respuesta a la anterior petición, nuevamente reitera su petición el día 19 de diciembre de 2023, a la que le correspondió el radicado No. 2023ER46141401.

Que, pese a haber tenido cita con la oficina de cobro en tres oportunidades para pedir respuesta, a la fecha de instaurar la presente acción de tutela, desde que se presentó el primer derecho de petición (10 de noviembre de 2023) han transcurrido tres (3) meses dieciocho (18) días, y de la segunda petición (19 de diciembre de 2023) han pasado dos (2) meses ocho (8) días, sin obtener respuesta alguna, en donde se resuelva su solicitud de terminación del proceso, del levantamiento de medidas cautelares y devolución de dineros embargados; tiempo que sobrepasa los 15 días establecidos en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Para Resolver la situación jurídica.

Manifiesta que, pese al pago del total de las obligaciones por las que se dio inicio al cobro coactivo, que da lugar a la terminación inmediata del proceso de ejecución coactivo, se ve gravemente perjudicada, toda vez que continua vigente el proceso y las medidas cautelares decretadas, entre ellas el embargo de las cuentas bancarias; y, que conforme a los artículos 13, 14 y 15 del CPACA, es obligación de las entidades públicas resolver de fondo las situaciones jurídicas que sean de su competencia y conocimiento.

PRUEBAS

Ténganse en cuenta las documentales obrantes en el proceso allegadas por la accionante y por la entidad accionada.

TRÁMITE

Mediante auto calendado el pasado 01 de marzo de 2024, se admitió para su trámite la presente acción de tutela, requiriendo a la accionada para que se manifestara en torno a los hechos y pretensiones expuestas en la solicitud de amparo de la accionante.

La entidad accionada, en su escrito de contestación a la presente acción constitucional de tutela, señala que la accionante, presentó Derechos de Petición Nos. 2023ER425795O1 del 10/11/2023 y 2023ER46141401 de 19/12/2023, en el que, como PROPIETARIA, informa el pago de las obligaciones tributarias objeto del Proceso administrativo de cobro coactivo No. 202206094300103063

Que, así las cosas, la Oficina de Cobro General de la Subdirección de Cobro Tributario le dio alcance respuesta al derecho de petición e informó al peticionario a través de comunicación oficial radicada No. 2024ER053715O1 del 04/03/2023 enviado el mismo día, a los correos electrónicos señalados por la accionante: osmanandradesarria@gmail.com;

osmanandradesarria@hotmail.com y; lizcordobaa@hotmail.com, dando respuesta a la petición impetrada mediante la acción de tutela (ver anexo), informándole: “(...) este Despacho se permite informarle: Una vez realizadas las validaciones pertinentes y consultado el aplicativo de Obligaciones Tributarias de la Secretaría de Hacienda Distrital, el Sistema SAP LOGON y el Sistema de Información Tributaria SIT II, con fecha de corte 04/03/2024 se encuentra que las obligaciones objeto del Proceso administrativo de cobro coactivo No. 202206094300103063 fueron canceladas y en virtud de ello se ordenó la terminación de estos mediante la Resolución No. DCO-018459 del 04 de marzo de 2024, acto administrativo en proceso de notificación. Que en el referido mandamiento se ordenó el embargo del bien mueble o inmueble o sumas de dinero que posea o llegare a poseer el ejecutado, ya sea en salarios, honorarios o depósitos en cuentas de ahorro o corrientes, certificados de depósitos o títulos representativos de valores de Entidades Financieras o compañías de seguros en todo el país. Que, como resultado del embargo y secuestro de los dineros existentes en bancos, corporaciones y demás entidades financieras a nombre de la señora MARIA LIZBETH CORDOBA ABADIA identificada con C.C. No. 34549919 decretado por la Oficina de Cobro Especializado dentro del proceso administrativo de cobro coactivo No 202206094300103063, y conforme a la Resolución de Mandamiento de Pago No. DCO-034031 del 13 de junio del 2022, se constituyeron los siguientes Títulos de Depósito Judicial: (...). De igual forma, le informamos que al consultar las obligaciones tributarias de la señora MARIA LIZBETH CORDOBA ABADIA, identificada con CC No. 34549919, registra las obligaciones pendientes de pago relacionadas a continuación: (...). Esta información se expide sin perjuicio de los procesos que adelanten las demás dependencias de la Dirección Distrital de Cobro, Dirección de Impuestos de Bogotá y de las facultades de fiscalización, verificación, corrección y cobro que tiene la Administración; situaciones que pueden presentar modificaciones posteriores a la presente. Teniendo en cuenta lo anterior, le informamos que, para que este Despacho pueda ordenar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y proceder con la devolución de los Títulos de Depósito Judicial relacionados anteriormente, se requiere que el contribuyente o responsable de las obligaciones tributarias no tenga obligaciones insolutas exigibles a su cargo. Le recordamos que puede radicar sus requerimientos dirigidos a la Secretaría de Hacienda Distrital a través del correo electrónico: radicacionhaciendabogota@shd.gov.co De esta manera esperamos haber dado respuesta a su requerimiento y reiteramos el compromiso institucional de corresponder a la excelente cultura tributaria de los ciudadanos para con Bogotá, a través del mejoramiento continuo del servicio y la información con la cual ejecutamos nuestros procesos (...).”

Expone que, que, la información antes referida fue puesta en conocimiento del contribuyente mediante radicado No. 2024ER053715O1 del 04/03/2023 enviado el mismo día, a los correos electrónicos señalados por la accionante: osmanandradesarria@gmail.com; osmanandradesarria@hotmail.com y; lizcordobaa@hotmail.com. Que, la notificación o comunicación de los actos administrativos se realizó por medios electrónicos de conformidad con la Ley 2080 de 2021, razón por la cual se procedió a remitir mediante correo institucional y a los correos electrónicos señalados por la accionante: osmanandradesarria@gmail.com; osmanandradesarria@hotmail.com y; lizcordobaa@hotmail.com, con el fin de dar cumplimiento a la solicitud.

Que, de esta manera, considera demostrado que la Oficina de Cobro General de la Subdirección de Cobro Tributario de la Secretaría Distrital de Hacienda, en el marco de sus competencias cumplió con el deber legal de dar respuesta de fondo a la solicitud de la señora MARÍA LIZBETH CÓRDOBA ABADÍA.

Indica que la acción de tutela es improcedente por haberse configurado un hecho superado y que motivo por el cual esta acción de tutela carece de objeto, porque la supuesta omisión que dio origen al proceso ha cesado, por cuanto dio respuesta al derecho de petición presentado por la accionante, y que, en esa medida, la presunta vulneración alegada no existe.

CONSIDERACIONES

La acción de tutela tal como se encuentra dispuesta en el artículo 86 de la Carta Magna, constituye un mecanismo expedito para la protección eficaz e inmediata de los derechos fundamentales de las personas, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades y excepcionalmente de un particular, siempre que el accionante no cuente con otro medio de defensa o de existir este, se interponga como medio transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable.

La presente acción de tutela se abre paso con base en la presunta vulneración del derecho fundamental de petición, siendo así considerado por la señora MARÍA LIZBETH CÓRDOBA ABADÍA, por lo que solicita se ordene a la entidad accionada SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ, D.C., brinde respuesta integra y de fondo a la petición presentada 10 de noviembre de 2023 radicado con el No. 2023ER425795O1, y el presentado el 19 de diciembre de 2023.

Descendiendo al estudio del caso, el derecho fundamental presuntamente conculcado es el de petición, el cual se encuentra establecido en el artículo 23 de la Constitución Política que dispone: ***“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”***.

A su vez la ley 1755 de 2015 que modificó la ley 1437 de 2011, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, viene desarrollando el derecho de petición frente a autoridades públicas de la siguiente manera: ***“Derecho de Petición ante Autoridades Reglas Generales Artículo 13. Objeto y Modalidades del Derecho de Petición ante Autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante Artículo***

14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado

respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades 'en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

Artículo 15. Presentación y radicación de peticiones. Las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este Código. Cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario los que falten. Si este insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los requisitos o documentos faltantes. Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta. Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, y pondrán a disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley expresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o documentos adicionales que los formularios no contemplen, sin que por su utilización las autoridades queden relevadas del deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que les sean planteados o presentados más allá del contenido de dichos formularios. A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, recibida por el funcionario respectivo con anotación de la fecha y hora de su presentación, y del número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Esta autenticación no causará costo alguno al peticionario. Parágrafo 1. En caso de que la petición sea enviada a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos, esta tendrá como datos de fecha y hora de radicación, así como el número y clase de documentos recibidos, los registrados en el medio por el cual se han recibido los documentos. Parágrafo 2. Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas. Parágrafo 3. Cuando la petición se presente verbalmente ella deberá efectuarse en la oficina o dependencia que cada entidad defina para ese efecto. El Gobierno Nacional reglamentará la materia en un plazo no mayor a noventa (90) días, a partir de la promulgación de la presente Ley.

Artículo 16. Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener, por lo menos: 1. La designación de la autoridad a la que se dirige. 2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica. 3. El objeto de la petición. 4. Las razones en las que fundamenta su petición. 5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. 6. La firma del peticionario cuando fuere el caso. Parágrafo 1. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos.

Parágrafo 2. En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta.

A su vez, con la entrada en vigencia la ley 2207 de mayo 17 de 2022 se derogó el artículo 5 del Decreto Legislativo 491 de 2020, por lo que los términos para responder los derechos de petición son nuevamente los consagrados en el artículo 14 de la ley 1755 de 2015.

Este derecho consagrado en la Constitución Política, tiene como objeto primario y esencial, el que, a los peticionarios, les sean brindadas respuestas a sus solicitudes, de forma clara, precisa y oportuna, sin que ello implique una decisión favorable a sus intereses. Se fundamenta lo anterior, no solo en la de conocer el contenido mismo de la comunicación, sino también con el fin de poder interponer los recursos y demás acciones que estime convenientes.

Facultad de la que hizo uso la señora MARÍA LIZBETH CÓRDOBA ABADÍA, radicando derecho de petición el día 10 de noviembre de 2023 y reiterado el 19 de diciembre de 2023, tal como consta en el expediente, momento a partir del cual surgió para la SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ, D.C., la obligación de dar respuesta de fondo a la accionante, debiendo ser la misma suficiente, eficiente y congruente con lo pedido, emitiéndola dentro del término previamente establecido y debiéndola poner en conocimiento de la peticionaria.

Al respecto la H. Corte Constitucional en la sentencia T-094 de 2016, precisó: **“42. El derecho de petición puede ser interpuesto ante particulares y autoridades públicas, la importancia respecto de éstas últimas radica en que a través de éste, se coloca a la administración en funcionamiento, se exige el goce de distintas prerrogativas y se accede a la información, es por esta razón, que dentro de sus garantías se encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que, la respuesta debe entregarse dentro del término legalmente establecido para ello y, (ii) la contestación debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que, permita al peticionario conocer la situación real de lo solicitado. Sobre el tema existe abundante jurisprudencia, en la que esta Corte ha definido los conceptos básicos y mínimos que componen este derecho, así como su núcleo esencial; sobre éste último aspecto ha manifestado que el mismo radica en la resolución integral de la solicitud, de manera que se atienda lo pedido, sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva. Al respecto, esta Corporación ha dicho que: “... una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario[15], es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea[16]; y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta[17].”**

43. En otras palabras, el goce efectivo del derecho de petición implica que exista una contestación que resuelva efectivamente lo pedido, sin que implique que la respuesta corresponda a lo solicitado, puesto que la misma puede ser negativa siempre que sean claras las razones por las cuales no se accede a lo peticionado, dicho de otra manera, no puede ser evasiva o abstracta. De la misma forma, el núcleo esencial del derecho fundamental en comento, requiere que la respuesta sea oportuna, por lo que debe encontrarse dentro del término legalmente establecido para ello.”

Sin que lo anterior quiera significar que la respuesta deba ser positiva, lo que se pide a las autoridades y particulares, es que, dentro del término

establecido por la ley, procedan a resolver las peticiones respetuosas realizadas por cualquier persona, de una forma clara, precisa, pronta y congruente con lo solicitado.

Por su parte, la accionada aduce que atendió el requerimiento de la peticionaria, emitiendo la correspondiente respuesta solicitada por la actora, el pasado 04 de marzo de 2024, a través del oficio No. 2024ER053715O1, la cual fue remitida a la dirección electrónica indicada en el escrito de tutela y en el derecho de petición, esto es, osmanandradesarria@gmail.com; osmanandradesarria@hotmail.com y; lizcordobaa@hotmail.com, donde le informan todo lo referente a sus peticiones y le precisan: “(...) este Despacho se permite informarle: Una vez realizadas las validaciones pertinentes y consultado el aplicativo de Obligaciones Tributarias de la Secretaría de Hacienda Distrital, el Sistema SAP LOGON y el Sistema de Información Tributaria SIT II, con fecha de corte 04/03/2024 se encuentra que las obligaciones objeto del Proceso administrativo de cobro coactivo No. 202206094300103063 fueron canceladas y en virtud de ello se ordenó la terminación de estos mediante la Resolución No. DCO-018459 del 04 de marzo de 2024, acto administrativo en proceso de notificación. Que en el referido mandamiento se ordenó el embargo del bien mueble o inmueble o sumas de dinero que posea o llegare a poseer el ejecutado, ya sea en salarios, honorarios o depósitos en cuentas de ahorro o corrientes, certificados de depósitos o títulos representativos de valores de Entidades Financieras o compañías de seguros en todo el país. Que, como resultado del embargo y secuestro de los dineros existentes en bancos, corporaciones y demás entidades financieras a nombre de la señora MARIA LIZBETH CORDOBA ABADIA identificada con C.C. No. 34549919 decretado por la Oficina de Cobro Especializado dentro del proceso administrativo de cobro coactivo No. 202206094300103063, y conforme a la Resolución de Mandamiento de Pago No. DCO-034031 del 13 de junio del 2022, se constituyeron los siguientes Títulos de Depósito Judicial: (...). De igual forma, le informamos que al consultar las obligaciones tributarias de la señora MARIA LIZBETH CORDOBA ABADIA, identificada con CC No. 34549919, registra las obligaciones pendientes de pago relacionadas a continuación: (...). Esta información se expide sin perjuicio de los procesos que adelanten las demás dependencias de la Dirección Distrital de Cobro, Dirección de Impuestos de Bogotá y de las facultades de fiscalización, verificación, corrección y cobro que tiene la Administración; situaciones que pueden presentar modificaciones posteriores a la presente. Teniendo en cuenta lo anterior, le informamos que, para que este Despacho pueda ordenar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y proceder con la devolución de los Títulos de Depósito Judicial relacionados anteriormente, se requiere que el contribuyente o responsable de las obligaciones tributarias no tenga obligaciones insolutas exigibles a su cargo. Le recordamos que puede radicar sus requerimientos dirigidos a la Secretaría de Hacienda Distrital a través del correo electrónico: radicacionhaciendabogota@shd.gov.co De esta manera esperamos haber dado respuesta a su requerimiento y reiteramos el compromiso institucional de corresponder a la excelente cultura tributaria de los ciudadanos para con Bogotá, a través del mejoramiento continuo del servicio y la información con la cual ejecutamos nuestros procesos (...).”, remitiéndole además copia de la RESOLUCIÓN No. DCO-018459 DEL 04 DE MARZO DE 2024, por medio de la cual se termina el proceso de Cobro Coactivo No. 202206094300103063, seguido en contra de la accionante, mantiene las medidas de embargo y secuestro decretadas el embargo y dispone la notificación de la resolución a la actora. Lo cual acredita con la correspondiente copia de la respuesta emitida y el certificado de remisión al correo electrónico de la accionante.

En este orden de ideas, con fundamento en las probanzas obrantes en el plenario, infiere este despacho que los objetivos perseguidos por la actora con esta solicitud de tutela se encuentran satisfechos, pues como se anotó en

precedencia; la entidad accionada SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ, D.C., dio respuesta suficiente, clara y congruente con lo solicitada por el accionante, y así mismo, esta se considera efectiva por cuanto obra prueba que la respuesta fue remitida a las direcciones electrónicas señaladas por el accionante en el acápite de notificaciones del derecho de petición y en el escrito de tutela, advirtiendo entonces que por sustracción de materia no hay orden que impartir a la accionada, pues la omisión o vulneración que se pretendía proteger por vía constitucional, se ha dejado de producir.

Ha de indicarse que la H. Corte Constitucional a través de sus salas de revisión, se ha pronunciado en múltiples ocasiones respecto de lo que se debe entender por hecho superado. Así por ejemplo en la Sentencia T-167 de 1997 la Sala Novena de Revisión de Tutelas dijo lo siguiente ***“El objetivo fundamental de la acción de tutela es la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en aquellos casos en que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los términos que establece la Constitución y la ley. Obsérvese que la eficacia de esta acción se manifiesta en la posibilidad que tiene el juez constitucional, si encuentra probada la vulneración o amenaza alegada, de impartir una orden encaminada a la defensa actual e inminente del derecho en disputa. Pero si la situación de hecho que generó la violación o la amenaza ya ha sido superada, el mandato que pueda proferir el juez en defensa de los derechos fundamentales conculcados, ningún efecto podría tener, el proceso carecería de objeto y la tutela resultaría improcedente; en otras palabras, la acción de amparo perdería su razón de ser.”***

Y la Sentencia T-007 de 2020 la Sala Octava de Revisión de Tutelas precisó: ***“El hecho superado, se encuentra regulado en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, “tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer”¹.***

Siguiendo los lineamientos trazados por la jurisprudencia y en consonancia con la manifestación realizada por la SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ, que se entiende efectuada bajo la gravedad de juramento y por lo cual es vinculante, se colige que la situación de hecho que causaba la supuesta amenaza al derecho fundamental de petición del accionante ha desaparecido, por ende, la acción de tutela, a pesar de ser procedente, pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial.

Razón por la que se denegará la acción de tutela por constituirse un hecho superado.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Once Civil Municipal de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

¹ Sentencia T- 449 de 2018.

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela instaurada por **MARÍA LIZBETH CÓRDOBA ABADÍA** contra **SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ, D.C.**, por constituirse un de un hecho superado.

SEGUNDO: ORDENAR la notificación de lo aquí resuelto a las partes e intervinientes por el medio más expedito y eficaz de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: DISPONER la remisión de lo actuado ante la H. Corte Constitucional, en caso de no ser impugnada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



AURELIO MAVESoy SOTO
JUEZ.-

CB